



El ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la presidenta de la Conferencia de Rectores, Adelaida de la Calle. / LUIS SEVILLANO

## Campus atrapados entre recortes

Los rectores reclaman al ministro Wert soluciones para sus problemas de financiación y que se permita volver a contratar nuevos profesores

MANUEL PLANELLES  
Sevilla

Una representación de los rectores acude el próximo viernes al Ministerio de Educación para abordar los cambios en el sistema de enseñanza superior que quiere acometer José Ignacio Wert. Y llegarán con sus reivindicaciones bajo el brazo. Se trata de la primera reunión de la comisión mixta Gobierno-Universidades que se creó en marzo para analizar esta reforma. Pero, como ya adelantó hace dos meses Adelaida de la Calle, los rectores consideran que en este momento es más urgente resolver los problemas que se han generado en los campus con los recortes. "Todas las universidades estamos con problemas financieros y con una necesidad sobre todo en lo referente al profesorado", señaló

en marzo la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

"Hay que aprovechar este espacio para tratar temas concretos", apunta ahora Xavier Grau, responsable de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Uno de los asuntos que más preocupa a los gestores universitarios es el bloqueo de la incorporación de docentes. El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, lanza una advertencia: de mantenerse las restricciones en la contratación de profesores, en una década se perderán 25.000 profesores, el 25% de la plantilla de todas las universidades españolas. Al año se jubilan unos 2.500 docentes, recuerda Ramírez de Arellano. "Y ahora no hay ni incorporaciones ni promociones", lamenta el rector sevillano.

Xavier Grau y Ramírez de Arellano forman parte del equipo que la CRUE nombró como su representante en la comisión mixta con Educación. También están los rectores Pedro González Trevijano (Rey Juan Carlos), Juan Carlos Domínguez (San Pablo-CEU) y Julio Lafuente López (Pública de Navarra). Los cinco se reunieron la semana pasada en Madrid para preparar el encuentro del viernes con el ministerio. A esa reunión se llegará con el informe sobre la reforma educativa que ha elaborado un grupo de expertos designados por Wert. Pero los rectores no entran de momento a analizar con profundidad el informe. "Queremos saber cuál es el marco de trabajo", detalla el rector de la Rovira i Virgili.

Grau y Ramírez de Arellano aplauden que el ministro abor-

de este asunto con el sector a través de una comisión mixta. "Es la estrategia correcta", sostiene el rector de Sevilla, quien, sin embargo, cree que una gran reforma "requiere de grandes acuerdos", de un "pacto de Estado" para que las normas sean estables. Y eso llevaría bastante tiempo.

Grau aspira a que se aproveche la comisión mixta para "desbloquear" la contratación de docentes. La tasa de reposición impuesta por el Gobierno (solo se pueden cubrir el 10% de las jubilaciones) está detrás de este problema. A finales del año pasado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevó a los tribunales a 15 universidades por entender que se habían saltado estas limitaciones. "Se está haciendo una aplicación muy estricta de la tasa de reposición y

se están parando incluso las promociones dentro de la Universidad", lamenta Ramírez de Arellano. "El próximo año debe cambiar esta situación", opina Grau. Los rectores han pedido que en las reuniones de la comisión mixta también se sienta un representante del Ministerio de Hacienda para poder abordar el conflicto. Y varias comunidades autónomas ya han planteado que se suavice la tasa de reposición.

El otro gran problema que arrastran los campus es el de la financiación. "Hemos sufrido un recorte brutal de 1.000 millones en cuatro años", lamenta Ramí-

Los responsables universitarios piden que se suavice la tasa de reposición

El director de Sevilla cree que se pueden perder 25.000 docentes en 10 años

rez de Arellano. Y a ese tijeretazo se le unen las deudas que las comunidades tienen con los campus. Por ejemplo, a las universidades andaluzas la Junta le debe unos 800 millones de euros, explica Ramírez de Arellano. En el caso de las catalanas, Grau cifra la deuda en 200 millones. En ambos casos, los retrasos se arrastran desde 2011. "Estamos atrapados entre Administraciones", apunta el rector de Sevilla.

Tras las deudas acumuladas están los problemas de liquidez de los Gobiernos regionales. Los rectores tenían la esperanza de beneficiarse del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que puso en marcha en Gobierno para que las comunidades pudieran reducir sus deudas con las entidades bancarias y los proveedores. Pero las universidades se quedaron fuera. "Dentro de los proveedores estamos al final de la lista", detalla Grau. De ahí, la insistencia de los rectores en que en las reuniones con Educación también se incluyera a representantes del Ministerio de Hacienda, el departamento encargado de diseñar y supervisar el FLA.

## Universidad: 'certezas' arriesgadas

ANÁLISIS

Antonio Ramírez de Arellano

Dedicar eficientemente recursos humanos y materiales a una tarea requiere una idea clara sobre el servicio que se presta. En el ámbito de la Universidad pública, debemos precisar por qué modelo optamos, basando nuestro diagnóstico en datos contrastados, y procurando evitar eslóganes y prejuicios, por mucho que su repetición jaculatoria pueda satisfacer a algunos. En los últimos dos años, lejos de esta actitud deseable, nos encontramos recortes irreflexivos y normativas limitadoras que están poniendo en riesgo estructural serio a la Universidad, sin que el daño causado se pueda justificar por los ahorros producidos, salvo que el objetivo sea el daño mis-

mo. Hay que saludar que el Ministerio de Educación quiera hablar con las universidades antes de abordar la reforma anunciada. Esta es la fórmula de trabajo correcta, que nunca debió abandonarse. Sucede, sin embargo, que la reforma se ha iniciado ya de forma encubierta con un ataque deliberado y sin precedentes al colectivo de profesores e investigadores universitarios; especialmente a los más jóvenes con vocación profesional académica y con expectativas legítimas de acceder y progresar en ella.

Durante el período 2011-2020 la Universidad perderá por jubilación al 25% de su profesorado estable de continuar las actuales restricciones, con un envejecimiento de las plantillas del todo inexplicable y extraño a las estructuras académicas de nuestros países de referencia. Si esto es lo que se busca, que se reconozca y se asuman las

consecuencias sobre la educación superior y la investigación en España.

Fuentes del ministerio, por ejemplo, han expresado su "alarma" porque la Aneca haya acreditado en cinco años a unos 13.500 profesores e investigadores (un 75% de los solicitantes), que así tienen opción a promocionar o acceder a la carrera de profesor universitario. Se ha afirmado frívolamente que las acreditaciones son "un coladero". Siendo admisible cualquier propuesta de mejora fundamentada, este diagnóstico evita la evidencia, fácil de colegir, de que son precisas unas 16.000 acreditaciones cada quinquenio para mantener el número de efectivos y las estructuras de plantillas que teníamos en 2008, después del tremendo parón que en su día supusieron las habilitaciones nacionales. Lejos de ser un coladero, la Aneca ha permitido elevar el nivel

general de la Universidad pública, mejorado la igualdad de oportunidades, y de hecho no ha podido trabajar lo suficientemente rápido para el sistema.

Por ese motivo, es justo y legítimo que las universidades en su propio interés, y los casi cuatro mil acreditados que esperan la convocatoria de plazas en toda España, reclamen una oportunidad. No pedimos, como se ha dejado entrever maliciosamente, que se les garantice una plaza de profesor, convocada a su medida. Tan solo exigimos que tengan la posibilidad de optar a ella. Si el conflicto de los acreditados sin oportunidades ni esperanzas no ha estallado aún es por la comprensión de estas personas, que entienden las demoras en circunstancias difíciles. Pero el bloqueo ni puede ni debe prolongarse más, so pena de que la "reforma universitaria" tenga que hacerse finalmente sobre ruinas.

Antonio Ramírez de Arellano es rector de la Universidad de Sevilla.